

Medellín, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	DECLARATIVO - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
Radicado	05088 31 03 001 2019 00223 01
Demandante	JOHN ALEXANDER HERNÁNDEZ PIZARRO y JOHANA ESTRADA JARAMILLO
Demandado	LUIS CARLOS MUÑOZ MOLINA, GLADIS HURTADO GARCÍA, TAX COOPEBELLO y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Juzgado Origen	PRIMERO CIVIL CIRCUITO BELLO

Decide la Sala la apelación de la sentencia en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

1.1 DEMANDA¹.

Pretende la parte actora se declare la responsabilidad civil de Luis Carlos Muñoz Molina, Gladis Hurtado García y Tax Coopebello, en consecuencia, se condenen solidariamente al pago de indemnización de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales en favor de John Alexander Hernández Pizarro² y Johana Estrada Jaramillo³ y; adicionalmente, se declare que Compañía Mundial de Seguros S.A., se encuentra obligada a cubrir la indemnización de perjuicios y los intereses de mora causados desde el 12 de diciembre de 2018.

Expuso que el 26 de agosto de 2017 en la Diagonal 52 No 12 – 39 de Bello, ocurrió un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo taxi de placas TRJ432 conducido por el señor Luis Carlos Muñoz, propiedad de Gladis Hurtado García, afiliado a Tax Coopebello y asegurado por la Compañía Mundial de Seguros S.A., y, la motocicleta de placas NVH82D conducida por John Alexander Hernández, en la cual se desplazaba como parrillera Johana Estrada Jaramillo.

Refirió que el conductor del taxi aportó la única causa del accidente, toda vez que, abrupta e intempestivamente intentó retomar la vía principal por la cual circulaba la motocicleta con prelación vial, invadiendo su carril, impactando y arrojando a un costado a los demandantes causándoles lesiones y daños a la motocicleta. Suceso por el cual el 14 de febrero de 2018 la autoridad de tránsito declaró contravencionalmente responsable a Luis Carlos Muñoz, conductor del taxi.

Señaló que John Alexander fue atendido en la Fundación Clínica del Norte, en donde le diagnosticaron *“fractura abierta del 4° y 5° dedo de la mano derecha, fractura abierta en la cabeza de la falange media del 5° dedo con*

¹ Ver ruta carpeta 07. EXPEDIENTE REMITIDO NUEVAMENTE POR EL JUZGADO / 02CuadernoPrincipal / archivo 1.0 050883103001 2019-00223-00 VERBAL páginas 475 a 519.

² Por las siguientes sumas de dinero: Daño emergente (\$1.113.150); Lucro cesante consolidado (\$5.305.272); Lucro Cesante Futuro (\$25.443.305); Daño Moral (35 SMMLV); Daño a la vida en relación (35 SMMLV) indexadas a la fecha de la sentencia.

³ Por las siguientes sumas de dinero: Lucro cesante consolidado (\$6.397.967); Lucro Cesante Futuro (\$32.232.633); Daño Moral (55 SMMLV); Daño a la vida en relación (55 SMMLV).

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

luxación del fragmento distal, avulsión del 5° dedo de la mano derecha en sección tendinosa, herida en 5° dedo en región dorsal de falange medial y distal con defecto de cobertura y pérdida del extensor del dedo, lesión epiquinio, necrosis y laceración de tejidos blandos, trauma y contusión en rodilla derecha”, que implicaron el sometimiento a intensos y dolorosos tratamientos médicos y cicatrices que afectan la apariencia estética.

Además, una incapacidad médica de 60 días y secuelas por *“deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente por cicatriz de 10 cm en zona de muñeca derecha, deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente por las lesiones cicatriciales retráctiles en 4° y 5° dedo de mano derecha y perturbación funcional de miembro superior derecho, por la limitación en un 50% a la flexión total del 4° y 5° dedo de la mano derecha”*. Circunstancias que le impidieron continuar desempeñando sus labores cotidianas como lo hacía anteriormente, sumado a una pérdida de capacidad laboral del 10.54%.

Adujo que Johana igualmente fue trasladada a la Fundación Clínica del Norte donde le diagnosticaron *“fractura diafisaria de fémur derecho con acortamiento y cabalgamiento, fractura de fémur derecho transversa, fractura de los tres primeros dedos del pie derecho, trauma en mano izquierda y limitación funcional de clavícula y hombro izquierdo”,* lo que generó intensos y dolorosos tratamientos médicos y quirúrgicos, cicatrices en el cuerpo y arcos de movimiento conservados.

Adicionalmente, presentó incapacidad médica de 180 días y secuelas por *“deformidad anatómica que afecta el cuerpo de carácter permanente, secundario a cicatrices y por hundimiento anatómico, perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente por acortamiento de miembro que la obliga a coger y episodios de depresión”*. Secuelas que la imposibilitaron para continuar realizando labores cotidianas, además de una pérdida de capacidad laboral establecida en 20.13%.

Puntualizó que los demandantes han padecido tristeza, angustia, congoja, dolores y aflicciones que los sumen en profundas depresiones y alteran su estado emocional y psicológico, impidiéndoles el disfrute de las actividades que otrora disfrutaban y brindaban placer.

Precisó que, John Alexander para la fecha del accidente se desempeñaba como montador y domador de equinos en el Criadero Tierra de Fuego con un contrato a término indefinido, devengando un salario mensual de \$1'247.000, Johana era trabajadora independiente, afectándose sus ingresos. Añadió que, la motocicleta sufrió daños y su costo de reparación ascendió a la suma de \$1'113.150.

1.2 CONTESTACIÓN.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

LUIS CARLOS MUÑOZ MOLINA, GLADIS HURTADO GARCÍA y TAX COOPEBELLO ⁴ contestaron la demanda aceptando como cierta la ocurrencia del accidente en cuanto a la hora, lugar, vehículos involucrados y conductores de los mismos, así como la condición de pasajera de la demandante Johana Estrada; también reconocieron la declaración de responsabilidad contravencional de Luis Carlos Muñoz, pero precisando que en dicho acto no se exoneró a John Alexander Hernandez, sino que se le impuso sanción por conducir en estado de embriaguez y; también aceptaron la calidad de propietaria de la demandada Gladis Hurtado y la existencia del seguro que amparaba la actividad del automotor. Negaron que la única causa del accidente proviniera del conductor del taxi, afirmaron que no les constan el resto de los hechos y se opusieron a las pretensiones y al juramento estimatorio.

Formularon las excepciones de mérito denominadas “*culpa exclusiva de la víctima*”, toda vez que el accidente se produjo únicamente por causa del conductor de la motocicleta al desplazarse a alta velocidad y en estado de embriaguez, sin esquivar el taxi, impactándolo por la parte trasera; “*reducción del monto indemnizatorio*”, en porcentaje no menor al 50%, por exponerse el conductor de la motocicleta en forma imprudente al daño; “*falta prueba del daño*”, por ausencia de medios de convicción de los ingresos económicos de los demandantes, condiciones personales o familiares en que vivían y gastos de reparación de la motocicleta y; “*exageradas e infundadas pretensiones*”.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.⁵, contestó la demanda, al igual que los codemandados, reconoció la ocurrencia del accidente en cuanto a lugar, fecha, vehículos y pasajera involucrados; también aceptó, conforme a lo documentado, la actuación contravencional, las lesiones, atención médica, tratamiento, secuelas, incapacidad y pérdida de capacidad laboral de las víctimas; asimismo reconoció la propiedad del vehículo y la existencia del seguro a su cargo y; negó certeza en cuanto a la responsabilidad del asegurado, asunto que constituye el objeto del litigio y; frente a los demás manifestó no constarle, se opuso a las pretensiones y objetó el juramento estimatorio.

Formuló como excepciones de mérito las que denominó “*prescripción*”, sin argumentar ni fundamentarla; “*inexistencia de la obligación*”, por falta de prueba de la culpa del conductor asegurado y de los perjuicios que se reclaman y; “*límite asegurado*”, aduciendo que debe considerarse que el límite patrimonial del contrato de seguro es 120 SMLMV al momento del accidente.

1.3 PRIMERA INSTANCIA⁶.

El 9 de febrero de 2021 se profirió sentencia en audiencia pública, mediante la cual se declaró la responsabilidad civil y solidaria de Luis Carlos Muñoz Molina, Gladis Hurtado García y Tax Coopebello, a quienes

⁴ Ibídem páginas 610 - 616

⁵ Ibídem páginas 630 - 636

⁶ Ibídem páginas 651 y 652

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

se condenó al pago de indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante consolidado, daño moral y a la vida de relación en favor de John Alexander Hernández Pizarro⁷ y de Johana Estrada Jaramillo⁸ y, se condenó a la Compañía Mundial Seguros S.A., al pago de la condena hasta el límite del valor asegurado y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

El fallador estableció como presupuestos para la prosperidad de la acción, el daño, la culpabilidad del agente y la relación de causalidad y destacó que la responsabilidad que se predica de los demandados es solidaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2344 del Código Civil.

Estimó el *a quo*, que del material probatorio recaudado podía extraerse que, con ocasión del accidente de tránsito, los demandantes sufrieron lesiones que implicaron tratamientos, intervenciones quirúrgicas y secuelas permanentes, de acuerdo al informe de medicina legal e historial clínico aportado, incapacidades por 60 y 180 días, así como la pérdida de capacidad laboral determinadas en 10,54% y 20,13% para John Alexander y Johana respectivamente, demostrándose así que los demandantes sufrieron un daño que, a su juicio, debía ser reparado.

Sostuvo que, en lo correspondiente a la culpa del agente, debía considerarse el asunto bajo el régimen de actividades peligrosas establecida en el artículo 2356 del Código Civil y, por tanto, la carga probatoria de tal presupuesto se desplazaba del lesionado al autor del daño.

Acogió lo determinado en la Resolución No 81760 del 14 de febrero de 2018 de la Secretaría de Movilidad de Bello, mediante la cual se concluyó la responsabilidad contravencional del demandado Luis Carlos Muñoz, al abstenerse de tomar precauciones suficientes para retomar la vía principal y haberse puesto como obstáculo de la motocicleta en la que transitaban los demandantes, ocasionando la colisión.

Coincidió con la autoridad del tránsito en el sentido de que el conductor del taxi faltó a la verdad, al ser desmentida su versión por el testigo presencial José David Álvarez, quien afirmó que el taxi sí estaba sobre la berma, intentó incorporarse al carril izquierdo y ello produjo que posteriormente la motocicleta impactara la parte trasera del taxi. Declaración que, a criterio del fallador, merecía credibilidad aun cuando se opusiera a la versión del conductor del taxi, quien afirmó que la motocicleta lo impactó por el lado trasero izquierdo de su vehículo y le ocasionó daños en toda la nave izquierda del mismo, circunstancia que el *a quo* halló imposible, pues si impactó el bómper trasero, no alcanzaría a producir daños en todo el lado izquierdo del taxi al punto de dañar incluso el retrovisor. Mientras que, la versión del testigo en comento, coincidía con la del demandante John Alexander, además de que el demandado

⁷ \$1'113.150 por concepto de daño emergente; \$ 5'303.270 por lucro cesante consolidado; 10 SMMLV por daño moral y \$5.000.000 por daño a la vida en relación.

⁸ \$6.397.967 por lucro cesante consolidado; 25 SMMLV por daño moral y \$15.000.000 por daño a la vida en relación.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

incurrió en contradicciones en la declaración rendida ante el tránsito y la surtida en el proceso, pues indicó ante la autoridad administrativa que llevaba una velocidad de 70 km y en el proceso afirmó que era de 65 a 70 Km y, de tal forma, contradecía la afirmación de transitar despacio.

Resaltó que, según el informe de alcoholemia el demandante tenía una concentración de 28.00 mg de etanol sobre 100 ml de sangre resultando grado cero, que la demandante Johana manifestó que el taxi no estaba en la vía, que se salió y los impactó, sin que tuviera señalización o estacionarias, misma hipótesis que conservaron los testigos Yolanda Pizarro y Jairo de Jesús Ruiz, quienes manifestaron que tenían conocimiento del suceso por la información que en su momento le brindaron los demandantes.

De la valoración anterior, el juzgador adujo hallar demostrada la responsabilidad del agente como segundo elemento de la acción y, en lo concerniente a la relación de causalidad entre el daño y la culpa concluyó que el accidente se produjo como se indicó en la demanda y fue ocasionado por el taxi de placas TRJ432.

Con relación al daño emergente, aseveró que no ofrecía dificultad su reconocimiento, puesto que se fundaba en los gastos asumidos para la reparación de la motocicleta de propiedad del demandante, conforme a certificación expedida por Inversiones Electromotos S.A.S., documento que no fue tachado de falso, siendo demostrativo del daño reclamado.

Accedió al lucro cesante, toda vez que aparecía demostrado que John Alexander se encontraba vinculado laboralmente a la Finca Tierra Fuego en labores de adiestramiento y monta de caballos devengando un salario de \$1'247.000, según certificado suscrito por Patricia Elena Hernández, quien reconoció el documento en audiencia, sin que tampoco se tachara de falso. Aunado a ello, también se acreditaría una pérdida de capacidad laboral de 10.54% sufrida por John Alexander con ocasión del diagnóstico de fractura en dedos de la mano derecha, deficiencia del miembro superior derecho y pérdida de movilidad que da cuenta de la discapacidad.

Accedió al lucro cesante reclamado por Johana Estrada, teniendo en cuenta que laboraba para la firma Dropopular S.A., devengaba como salario la suma de \$781.300 y tuvo una pérdida de capacidad laboral de 20.13%.

También reconoció los daños morales y a la vida de relación de ambos demandantes, los que podían presumirse dado el historial clínico y el concepto del médico legista, puesto que no admitía discusión que eran personas jóvenes que veían afectada la funcionalidad en sus miembros inferiores y defectos físicos visibles por la disfuncionalidad en la marcha, hechos que conllevan a una profunda frustración en la persona que los sufre, pues ya no podrían disfrutar de la vida, ni del trabajo como lo venían haciendo.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

Por último, consideró que las sumas reconocidas por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales se encuentran contenidas en los amparos contenidos en las pólizas aportadas, en virtud del contrato de seguro de automóviles vigente al momento del siniestro y que cubría el vehículo taxi afiliado a Tax Coopebello, motivo por el cual la aseguradora llamada en garantía y demandada debía asumir las condenas, teniendo en cuenta el porcentaje pactado por deducible.

1.4 TRÁMITE DE LA APELACIÓN.

La sentencia de primera instancia fue proferida en audiencia y notificada en estrados, inmediatamente fue apelada por ambas partes, quienes precisaron verbalmente los reparos frente a la decisión, luego, los complementaron por escrito dentro de los tres días siguientes a la finalización de la audiencia. La alzada fue admitida mediante auto del 30 de abril de 2021⁹.

Considerando el estado de emergencia sanitaria, se dio aplicación al artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020¹⁰, concediéndole a los apelantes la oportunidad para sustentar el recurso, quienes hicieron uso de ello, posteriormente, se corrió traslado de las sustentaciones, sin que se aportara réplica en el término legal¹¹.

2. CONTROL DE LEGALIDAD Y COMPETENCIA DEL SUPERIOR.

En atención a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 42 y en el artículo 132 del Código General del Proceso, se aprecian reunidos los presupuestos procesales para emitir sentencia porque se verificó la demanda en forma y su trámite adecuado, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y acudir al proceso respecto de los extremos del litigio y, no se advierten vicios ni irregularidades que configuren nulidad.

Por disposición del artículo 328 de la misma obra, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio o complementar en los términos del artículo 287, esta sala limita el análisis a los reparos concretos efectuados por los apelantes en contra de la decisión de primera instancia.

3. REPAROS CONCRETOS.

Con el propósito de que se modifique la decisión de primera instancia con relación al reconocimiento del lucro cesante futuro y la cuantificación de la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, la parte actora formuló motivos de inconformidad. Por su parte, la pasiva presentó sus censuras frente a la decisión, pretendiendo que se revoque la declaratoria de responsabilidad civil o, en su defecto, se reduzca la indemnización. Las

⁹ Ver archivo 09. 21-04-30 001 2019 00223 AS ADMITE APELACIÓN MPB

¹⁰ Mediante la Ley 2213 de 2022, se acogió como legislación permanente las disposiciones de dicho decreto para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, la ley conserva en el artículo 12 la disposición del artículo 14 del decreto en cuanto al trámite de la apelación de sentencias en materia civil y familia.

¹¹ Ver archivo 014. CONSTANCIA INGRESO A DESPACHO MAYO 26

partes no ejercieron derecho de réplica. Con base en las intervenciones de los recurrentes, se establecerán los problemas jurídicos objeto del estudio.

3.1 Reparos demandantes.

a. Indebida tasación de los perjuicios extrapatrimoniales. Criticó la cuantificación de los perjuicios morales y daño a la vida de relación, por no guardar proporción con la entidad de los padecimientos sufridos por los demandantes, las secuelas de carácter permanente, la pérdida de capacidad laboral demostrada en el proceso y la variación que supuso en las condiciones de vida, así como el hecho que los demandantes al momento del siniestro eran pareja generando padecimiento por el sufrimiento del otro. Reprochó que en la motiva enunciara sumas diferentes a las contenidas en la resolutive y que cuantificara el daño a la vida de relación en dinero cuando debió tasarla en salarios mínimos.

b. Desconocimiento del lucro cesante futuro. Reprochó que el *a quo* se pronunciara exclusivamente respecto del lucro cesante consolidado, omitiendo el futuro, pese a acreditar la pérdida de capacidad laboral que sufrieron los demandantes y los ingresos que percibían al momento del accidente mediante certificados ratificados en audiencia.

c. Desconocimiento de los intereses moratorios. Censuró la omisión de resolver la pretensión cuarta en cuanto a los intereses de mora según lo establece el artículo 1080 del Código de Comercio. A su juicio, había lugar a su estimatoria dado que se acreditó la responsabilidad del asegurado desde el mes siguiente a la presentación de la reclamación extrajudicial a la aseguradora, sin que hubiera cumplido con la obligación. Añadió que no es necesario la existencia de una sentencia judicial para reconocer los intereses a partir de su emisión.

3.2 Reparos demandados Luis Carlos Muñoz Molina, Gladis Hurtado García y Tax Coopebello.

a. Acreditación de la culpa exclusiva de la víctima. Recriminaron que no se valoraran adecuadamente las circunstancias en que ocurrió el accidente, esto es, que el impacto entre ambos rodantes se presentó cuando el conductor de la motocicleta conducía a alta velocidad, en estado de embriaguez y no le resultó posible esquivar el taxi, impactando la parte trasera de dicho rodante, generando las lesiones de los demandantes y configurándose una culpa exclusiva de la víctima. A su juicio, debió considerarse la posición final del taxi, la afirmación del demandante de ir a 60 km/h, la sanción de la inspección del tránsito al conductor de la motocicleta por conducir bajo los efectos del alcohol para concluir que la causa eficiente fue aportada por los demandantes, incluida Johana Estrada al decidir trasladarse como parrillera a sabiendas que el conductor no estaba en plenas capacidades. Agregaron que, en el evento de no estimar la culpa exclusiva de la víctima debería considerarse la reducción de la indemnización en los términos del artículo 2357 del Código Civil.

b. Prueba insuficiente del daño. Adujeron que no hay prueba suficiente del daño que permita su liquidación y que los declarantes Jairo de Jesús Hernández y Yolanda Pizarro son testigos de oídas.

3.3 Reparos demandada Compañía Mundial Seguros S.A.

a. Acreditación de la culpa exclusiva de la víctima. Discutió, igualmente, la culpa exclusiva en los demandantes, por cuanto el taxi se encontraba debidamente posicionado en su carril, el conductor de la motocicleta no tomó medidas de precaución y no frenó siendo lo indicado, destacó asimismo el estado de embriaguez de John Alexander, aspectos por los cuales debió exonerarse de responsabilidad a los demandados o, al menos, generar una reducción en la indemnización.

3.4 Problemas Jurídicos.

Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer:

- a) Si los demandados se liberaron de la obligación resarcitoria demostrando el hecho exclusivo de la víctima, consistente en que el conductor de la motocicleta se encontraba en estado de embriaguez y conducía a exceso de velocidad generando el accidente o, en su defecto, si tales conductas u otras incidieron en algún grado en la producción del daño y se abre paso la reducción del monto indemnizatorio.
- b) Si es procedente el reconocimiento de las pretensiones de indemnización por lucro cesante futuro y los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio.
- c) Determinar si se probó la cuantía de los perjuicios, si la tasación se encuentra calculada adecuadamente y atiende a los criterios jurisprudenciales.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO.

4.1 Responsabilidad por actividades peligrosas.

A partir del artículo 2341 del Código Civil, nuestra jurisprudencia ha establecido los tres pilares fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual: el daño, la culpa y el nexo de causalidad entre ellos¹².

Particularmente, con base en el artículo 2356 del mismo estatuto, se ha construido la teoría de la responsabilidad por actividades peligrosas, en virtud de la cual se obliga a reparar el daño a quien se vale de acciones o instrumentos que multiplican el poder del ser humano, elevando con ello

¹² Ver sentencia SC4455-2021 que, entre otras, cita y destaca providencia del 17 de septiembre de 1935 en la que la Corte "sostuvo que, «para que pueda decirse que la **culpa** de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una **conexión necesaria** entre dicha **culpa** y el **perjuicio**». En el mismo sentido la SC2107-2018 del 12/06/2018: "Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también aquiliana, "(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores"".

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

su potencial dañino y alterando la simetría de la simple interacción entre particulares. De tal forma que, a modo de contrapeso, nuestro ordenamiento consagra una presunción, calificando la misma norma tal conducta dañina como de malicia o negligencia, circunstancia que en últimas se traduce en un beneficio probatorio para el damnificado, pues, para liberarse de la obligación de reparar, se impone al agente la carga de demostrar alguna causa extraña:

“Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en estos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño.”¹³

En lo esencial, esta doctrina se ha mantenido por parte la Corte Suprema de Justicia hasta la actualidad¹⁴, eso sí, en medio de profundas discusiones acerca de si la presunción referida corresponde a un régimen de responsabilidad subjetiva (presunción de la culpa) o a un régimen de responsabilidad objetiva (presunción de responsabilidad)¹⁵. Sin embargo, en medio del debate¹⁶ se han conservado los referidos presupuestos axiológicos de la acción de responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas¹⁷.

Conforme a lo previsto por el artículo 167 del CGP, según el cual *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, cuando se demanda la responsabilidad civil originada en actividades peligrosas no se requiere probar la culpa del agente y, por tanto, al demandante le corresponde demostrar el ejercicio

¹³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 14 de marzo de 1938, MP Ricardo Hinestrosa Daza, G.J. Tomo XLVI, páginas 210-222. Reiterada en las sentencias del 18 de mayo de 1938, MP Fulgencio Lequerica Vélez. G.J. Tomo XLVI, páginas 514-521 y, del 31 de mayo de 1938, MP Liborio Escallón G.J. Tomo XLVI, páginas 559-564.

¹⁴ Ver sentencias SC665-2019, SC4420-2020, SC2111-2021, SC2905-2021.

¹⁵ De las sentencias antes citadas, obsérvese como todas fueron recientemente expedidas, pero mientras que la SC665-2019 se fundamenta en el régimen subjetivo avizorando desde entonces la discusión en la aclaración de voto, por su parte las SC4420-2020 y SC2111-2021 sostienen la postura del régimen objetivo y exponen en todo su esplendor la discusión con cuatro aclaraciones de voto que dejan en evidencia la ausencia de unanimidad y, tal vez por ello mismo, la conveniencia de no tocar el asunto en providencias como la SC2905-2021.

¹⁶ El régimen de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa puede apreciarse en las sentencias hito del 14 de marzo de 1938 y 31 de mayo de 1938, hasta las más recientes SC5686-2018, SC665-2019 y SC4204-2021. Por su parte, la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva basada en la presunción de responsabilidad se expone en las sentencias SC3862-2019, SC4420-2020 y SC2111-2021.

¹⁷ Sentencia SC2905-2021 del 29/07/2021 “En tal eventualidad y con el fin de establecer la responsabilidad deprecada, a la víctima le basta acreditar el ejercicio de la actividad peligrosa desarrollada por su contendiente, el daño que padeció y la relación de causalidad entre aquella y este; al paso que el demandado sólo puede exonerarse demostrando que el perjuicio no fue producido por dicha operación, es decir, que obedeció al devenir de un elemento extraño y exclusivo, como la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o la de un tercero, únicas circunstancias que rompen el nexo causal citado.

Es desacertado, entonces, enfocar la defensa alegando la ausencia de culpa de los enjuiciados, toda vez que estos sólo pueden exonerarse de responsabilidad rompiendo la causalidad.”

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

de la actividad peligrosa por parte del demandado, el daño y su relación de causalidad; mientras que, para liberarse de la obligación resarcitoria, al demandado le compete probar un elemento exclusivo y extraño (fuerza mayor, caso fortuito, intervención de la víctima o de un tercero).

4.2 Causalidad.

En términos generales, se entiende por causa *“(a)quello que se considera como fundamento u origen de algo”*¹⁸ y en punto de la responsabilidad por actividades peligrosas este concepto tiene especial relevancia porque, como se acaba de exponer, la única manera de eximirse de ella es rompiendo el nexo de causalidad.

Los artículos 2356 y 2357 del Código Civil son normas en las que la causalidad se deduce de su texto:

“ARTÍCULO 2356. Por regla general todo **daño** que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

...

ARTÍCULO 2357. La apreciación del **daño** está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.” (Se destaca)

Se puede afirmar que para estructurar la responsabilidad civil derivada de una actividad peligrosa se requiere relación causal entre la conducta del agente y el daño, mientras que para reducir la indemnización correspondiente se requiere relación causal entre el daño y el comportamiento de la víctima; es decir, que la conducta de quien ocasiona y quien sufre el menoscabo pueden confluir en la realización del daño y en tal caso la causalidad resulta determinante tanto de la atribución de responsabilidad como de su exoneración¹⁹.

Entonces, por encima de las referencias normativas de carácter subjetivo ²⁰, para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas, desecharla o dosificarla, lo fundamental es la relación de causalidad entre las conductas del agente y de la víctima con respecto al daño, constituyéndose así la causa en el elemento coyuntural para definir si la obligación de reparar recae únicamente en el agente o si la imprudencia de la víctima lo puede liberar total o parcialmente según su intervención (incidencia) ²¹.

¹⁸ Diccionario de la Real Academia Española.

¹⁹ Sentencia SC7534-2015 del 04/06/2015: “2. La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.”. En el mismo sentido la SC10808-2015 del 13/08/2015 y la SC8209-2016 del 21/06/2016.

²⁰ Para la estructuración de la responsabilidad, el artículo 2356 refiriéndose a la malicia o negligencia del agente y para la apreciación del daño, el artículo 2357 remitiéndose a la imprudencia de la víctima.

²¹ Sentencia SC4232-2021 del 23/09/2021 en la que citando la SC5125-2020 del 15/12/2020, afirma: “La también denominada compensación de culpas es una forma de con causalidad, que en verdad no califica la negligencia o imprudencia del sujeto, sino el grado en que su conducta incidió en el daño.”

Es que no basta el actuar culposo de la víctima para configurar una causa extraña, así como tampoco dicha incuria justifica el daño, se requiere que su conducta irreflexiva *concurra efectivamente* en su realización, así lo sostiene la doctrina de la Corte:

"... cabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuación de la indemnización debida por el agente, pues para tales efectos será menester, y las razones son obvias, que la actividad de la víctima concurra efectivamente con la de aquél en la realización del daño.

Así lo ha entendido la corte al expresar que "(...) para que opere la compensación de culpas de que trata el artículo 2357 del Código Civil no basta que la víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producción del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la víctima efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño", pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fenómeno es el de que para deducir responsabilidad en tales supuestos'... la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas, que para los efectos de la graduación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. En la hipótesis indicada sólo es responsable, por tanto, la parte que, en últimas, tuvo oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo" (CLII, 109. - Cas. 17 de abril de 1991)." ²²

Para la identificación de la causa adecuada, cuando se discute la concurrencia, la Corte ha indicado que tal asunto "*se resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente*" ²³ y explica:

"Cuanto mayor sea la probabilidad, superior es la cuota de causalidad y su repercusión en la realización del resultado. De esa manera, se trata de una inferencia tendiente a establecer "el grado de interrelación jurídica entre determinadas causas y consecuencias" ²⁴.

²² Sentencia EXPEDIENTE No. 4972 del 06/05/1998, citada en la SC2107-2018 del 12/06/2018, en la que además se precisa que la concurrencia de culpas en la producción del daño se denomina concausalidad.

²³ Sentencia SC2107-2018 del 12/06/2018.

²⁴ LANGE, Schadenersatz, "Handbuch des Schuldrecht in Einzeldarstellungen Bd.1" (Manual de ley de obligaciones). Tübingen, Mohr, 1979.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

En rigor, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable único, y a contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución para atenuar el deber de repararlo.

De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del afectado, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal.”²⁵

Recientemente, en la sentencia SC3604-2021²⁶ la Corte desarrolló este método de análisis e identificación de la causa adecuada, precisando que comprende dos etapas²⁷: i) la **etapa fáctica**, en la que se seleccionan las condiciones materiales relevantes, necesarias, lógicas y suficientes para la realización del daño, sin valoración jurídica²⁸ y; ii) la **etapa jurídica**, en la que se seleccionan esas condiciones materiales para extraer solamente aquellas que tienen relevancia para ser subsumidas en una norma positiva que permite atribuir las consecuencias dañinas a un sujeto²⁹.

Pero no basta con estas dos fases de análisis, principalmente y teniendo en cuenta la crítica a la teoría de la causalidad adecuada³⁰, la providencia enfatiza en la necesidad del **criterio de regularidad causal**, que corresponde a que solo pueden ser consideradas causas jurídicas de un perjuicio los acontecimientos que, eliminando el elemento volitivo, deberían producirlo normalmente (probabilidad), es decir, excluyendo el azar, distinguiendo entre lo fortuito y lo previsible, de tal forma que lo predecible está bajo la esfera de dominio del individuo racional y por tanto

²⁵ Ibidem.

²⁶ Rad 47001-31-03-005-2016-00063-01 del 25/08/2021.

²⁷ Se explica en la sentencia: “La generalidad de los sistemas jurídicos occidentales admiten la necesidad de desarrollar el análisis de causalidad en dos fases diferenciadas. La primera, conocida como causalidad fáctica, o causalidad de hecho, tiene por objeto identificar, en sentido material, si una actividad es condición necesaria para la producción del hecho dañoso; la segunda, que suele denominarse como causalidad jurídica, o alcance de la responsabilidad busca atribuir, a través de criterios normativos, la categoría de causa a una de esas condiciones antecedentes —como directiva para imputar a su autor las secuelas de la interacción lesiva—.”

²⁸ Ibidem “Expresado de otra forma, en esta primera etapa del análisis causal simplemente se seleccionan, de entre el conjunto de acontecimientos que antecedieron a un hecho, aquellos que son imprescindibles para que este se produjera, y que, por lo mismo, pueden considerarse razonablemente como sus “causas materiales”, o más propiamente, como condiciones causales relevantes del resultado.”

²⁹ Ibidem “Ello es así porque las condiciones causales relevantes pertenecen a la esfera de los hechos, razón por la cual su relevancia intraprocesal dependerá de la posibilidad de subsunción en las complejas reglas que determinan cuándo es viable atribuir a una persona las secuelas de un resultado dañoso en cuya producción intervino materialmente*. En ese escenario, es ineludible acudir al ordenamiento en procura de las herramientas teóricas que permitan establecer si una condición causal concreta es apta para justificar la asignación de un débito indemnizatorio, o lo que es lo mismo, si puede considerarse como la causa jurídica relevante de dicho resultado.”

³⁰ Ibidem “Esta concepción de la causalidad, sin embargo, parece confundirse con la noción de culpa, y de hecho, en esta similitud se concentran los críticos del criterio de adecuación. De ahí que, para intentar destacar los rasgos diferenciales de ambos conceptos, se propusiera juzgar la previsibilidad del acto a partir de la información objetiva con la que se contaba al momento del daño, dejando de lado las creencias subjetivas del agente dañador.”

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

es admisible asignar responsabilidades cuando era posible pronosticar con anticipación el potencial dañino que implicaba el descuido³¹.

En suma, se trata de establecer, a partir de las condiciones fácticas relevantes y de las normas jurídicas en las que ellas se subsumen para imputar el daño, pero sin consideración a las condiciones subjetivas de los involucrados, la causa que previsiblemente lo ocasionó, es decir, con base en criterios de probabilidad y regularidad existentes al momento de su ocurrencia.

4.3 Perjuicios patrimoniales.

En la Sentencia SC506-2022, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró al respecto:

“En nuestro país, siguiendo la tradición escolástica, el artículo 1613 del Código Civil clasifica los perjuicios en daño emergente y lucro cesante y el artículo 1614 los define así: «Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación. o cumpliéndola imperfectamente, o retardar su cumplimiento».

Significa esto, que «el daño patrimonial puede manifestarse de dos formas: a) como la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio (daño emergente); o b) como la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante). Ambos pueden configurarse en forma conjunta ante la ocurrencia del ilícito (contractual o extracontractual), o bien separada e individualmente (vgr. daño emergente sin lucro cesante)»³².”³³

4.4 Perjuicios extrapatrimoniales.

Ha reconocido la jurisprudencia como perjuicios no patrimoniales el daño moral y el daño a la vida de relación. El daño moral recae sobre la parte interior y afectiva del ser humano de cara a sentimientos de aflicción, congoja, desilusión, tristeza y pesar, por tanto, su reparación se erige

³¹ Ibidem. Sostiene la Corte: “En conclusión, de entre las múltiples directivas jurídicas postuladas para guiar la selección entre condiciones antecedentes necesarias para la producción del daño, la jurisprudencia patria suele valerse —explícita o implícitamente— del criterio denominado causa adecuada, según el cual el agente debe ser considerado responsable «solo del daño que resulta regularmente y de acuerdo con el curso normal de las cosas de la conducta o actividad desplegada»³¹, teniendo en cuenta variables como la previsibilidad, la cercanía temporal entre la conducta y el daño, o la entidad de este en relación con las secuelas de aquella, entre otras.”

³² Trigo Represas Félix A. Benavente María I. Reparación de daños a la persona Tomo I Parte General Daño Emergente Lucro Cesante, Pérdida de Chance, Daño Moral Editorial Thomson Reuters La Ley, Primera Edición 2014, pág. 230

³³ Sentencia SC506-2022, Radicación 63001-31-003-0001-2015-00095-02, del 17 de marzo de 2022, MP Hilda González Neira.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

como una compensación a la perturbación del ánimo y sufrimiento.

El daño a la vida de relación, en términos de la Corte, *“puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad.”*³⁴

Frente a la cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales, la Corte acepta que son de difícil medición y no puede partir de operaciones matemáticas³⁵. La tasación se ha confiado tradicionalmente al arbitrio judicial, empero, no puede obedecer a caprichos del funcionario judicial, exige un análisis *“ponderado, razonado y coherente según la singularidad, especificación, individualización y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y la capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el quantum de debeatur se remite a la valoración del juez”*³⁶.

En definitiva, en ambas clases de perjuicios cobran importancia las reglas de la experiencia y la sana lógica, fijándose el *quantum* a partir del prudente arbitrio del juez, bajo un análisis serio, ponderado, coherente y reflexivo acerca de las características particulares, la magnitud del impacto y su incidencia en la víctima.

5. CASO CONCRETO.

En el asunto bajo estudio no hay discusión en cuanto a la demostración de los siguientes presupuestos axiológicos, esto es: i) el hecho generador del daño con ocasión del accidente de tránsito del 26 de agosto de 2017 y; ii) la confluencia de actividades peligrosas, consistentes en la conducción del taxi de placas TRJ432 por Luis Carlos Muñoz Molina, de propiedad de Gladis Hurtado García y asegurado por la Compañía Mundial de Seguros S.A., y, la conducción de la motocicleta de placas NVH82D por John Alexander Hernández Pizarro, en la que se desplazaba como parrillera Johana Estrada Jaramillo.

Corresponde establecer cuál fue la conducta que constituyó la causa adecuada y determinante del accidente de tránsito, en particular, si se produjo por conducir John Alexander a exceso de velocidad y/o hallarse en estado de embriaguez o, si desplegó alguna otra conducta que tuvo incidencia causal en las lesiones sufridas por él y su acompañante, de ser

³⁴ CSJ SC, 13 May. 2008, Rad. 1997-09327-01 citada en Sentencia SC20950/2017

³⁵ Ha sostenido la Corte: *“es cierto que son de difícil medición o cuantificación, lo que significa que la reparación no puede establecerse con base en criterios rigurosos o matemáticos; pero ello no se traduce en una deficiencia de esa clase de indemnización, sino en una diferencia frente a la tasación de los perjuicios económicos cuya valoración depende de parámetros más exactos”*. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de diciembre de 2013, radicación 2002-00099.

³⁶ Sentencia de casación del 18 de septiembre de 2009, M.P. William Namén Vargas, expediente: 20001-3103-005-2005-00406-01

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

así, si ello da lugar a la exoneración de responsabilidad de los demandados o a la reducción de la indemnización.

5.1 Incidencia causal, exclusiva o concurrente.

Con relación a la participación en la realización del daño, la Sala de Casación Civil ha sostenido:

“2. La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.

La participación de la víctima en la realización del daño es condición adecuada y suficiente del mismo y, por tanto, excluyente de la responsabilidad del demandado, cuando en la consecuencia nociva no interviene para nada la acción u omisión de este último, o cuando a pesar de haber intervenido, su concurrencia fue completamente irrelevante, es decir que la conducta del lesionado bastó para que se produjera el efecto dañoso o, lo que es lo mismo, fue suficiente para generar su propia desgracia.”³⁷

En el mismo sentido y conceptualizando el hecho exclusivo de la víctima, indicó la Corte:

“En otras palabras, para que el interpelado pueda liberarse plenamente de la obligación indemnizatoria, se requiere que el proceder de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, esto es, “que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad”³⁸, como causa exclusiva del reclamante o de la víctima.

Y de otro, según lo preceptúa el artículo 2357 del Código Civil³⁹, cuando en la producción del daño participan de manera simultánea agente y lesionado, circunstancia que no quiebra el “nexo causal”, indiscutiblemente conduce a una disminución proporcional de la condena resarcitoria impuesta eventualmente al demandado, la cual, se estimará dependiendo el grado de incidencia del comportamiento de la propia víctima en la realización del resultado lesivo⁴⁰.”

³⁷ Sentencia SC7534-2015 del 04/06/2015.

³⁸ CSJ SC 23 de noviembre de 1990, G.J. CCIV, pág. 69.

³⁹ “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

⁴⁰ CSJ SC 6 de abril de 2001, rad. 6690.

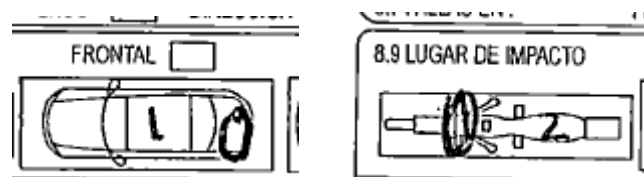
“Al servicio de la justicia y de la paz social”

En consecuencia, para establecer la intervención de agente y víctima en la realización del daño que motivó la demanda, se seguirá el método referido para la identificación de la causa adecuada y así se definirá la imputación de la responsabilidad.

5.1.1 Análisis fáctico.

Desde el punto de vista material, en lo concerniente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, el informe policial de tránsito evidencia que ocurrió en la diagonal 52 No 12 - 39 de Bello, en área urbana, sector comercial, condiciones climáticas normales, vía recta, plana, de doble sentido y dos calzadas, asfaltada, en buen estado y adecuada iluminación⁴¹.

Además, que los daños materiales ocurridos al taxi se situaron en el “*stop izquierdo, trasero, tapa maleta*”⁴² y en la motocicleta en la “*parte delantera*”⁴³, denotando que, el lugar de impacto ocurrió en la parte trasera izquierda del taxi y delantera de la motocicleta como en igual sentido muestra la imagen del informe:



Igualmente, se tiene demostrado que la Secretaría de Movilidad de Bello mediante la Resolución No 81760 del 14 de febrero de 2018 estableció que, Luis Carlos Muñoz no tomó las precauciones suficientes para retomar la vía principal, se puso como obstáculo de la motocicleta que tenía prelación vial y produjo la colisión, en consecuencia, atribuyó la responsabilidad contravencional al conductor del taxi y exoneró a John Alexander Hernández Pizarro⁴⁴.

Conforme a la versión rendida por Johana Estrada ante la autoridad de tránsito, se indicó que los de la moto pasaron el peaje y el taxista salió más adelante generando el impacto, hipótesis que mantuvo en la declaración rendida en el proceso. Por su parte, John Alexander afirmó que el taxi salió por la orilla de la carretera y produjo la colisión, versión que sostuvo en este proceso, agregando que impactó al taxi por la parte izquierda, que este no utilizaba direccionales y no tuvo tiempo de reacción.

Tales versiones guardan coherencia con lo manifestado por José David Álvarez Montoya, testigo presencial del accidente, quien depuso que lo observó porque se encontraba circulando por la “*parte posterior*” y, con relación a las circunstancias en que se produjo afirmó: “*vi que un taxi viene*

⁴¹ Ver ruta carpeta 07. EXPEDIENTE REMITIDO NUEVAMENTE POR EL JUZGADO / 02CuadernoPrincipal / archivo 1.0 050883103001 2019-00223-00 VERBAL página 37.

⁴² Ibíd. página 41

⁴³ Ibíd. página 39

⁴⁴ Ibíd. páginas 69 - 71

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

incorporándose al carril como desde la berma hacia el carril derecho y la moto venía por el centro del carril y lo colisiona”.

Con relación a la posición y conducción del taxi previo al accidente, refirió: *“lo veo que está saliendo de un estadero o un bar” (...) “viene desde la parte derecha de la berma hacia el carril” y la motocicleta “por el centro del carril y se empieza a desplazar hacia la izquierda, intenta incorporarse al carril izquierdo, en ese momento colisionó con la punta izquierda”.*

Aunado a ello, milita en el expediente informe de resultados de análisis de alcoholemia que le fue practicado al conductor de la motocicleta, cuyos hallazgos indican: ***“se detectó una concentración de 28.00 mg de etanol por 100 ml de sangre total. GRADO CERO, según ley 1696 de 2013 y Resolución 1844/2015”***⁴⁵ (Negrilla fuera del texto).

5.1.2 Análisis jurídico.

Los hechos descritos se subsumen en los siguientes preceptos de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre CNTT), cuerpo normativo vigente para el momento de la ocurrencia del accidente, que en su título III establece las normas de comportamiento en el tránsito.

La conducta del motociclista se considera infractora del deber del artículo 131F⁴⁶, norma que consagra como infracción susceptible de multa la conducción bajo la influencia del alcohol o sustancias psicoactivas. Lo anterior se deduce claramente del hallazgo a la prueba de alcoholemia efectuada al señor HERNÁNDEZ PIZARRO. En consecuencia, se demostró su imprudencia al desobedecer una prohibición legal independientemente de situarse en un grado 0 de alcoholemia, pues, a la luz del artículo 152 se desatendió la norma al hallarse entre 20 y 150 mg de etanol por 100 ml de sangre total.

Por su parte, la conducta del conductor del taxi infringió los deberes del artículo 55⁴⁷, que le exigía abstenerse de poner en riesgo a los demás actores viales, conocer y cumplir las normas y señales de tránsito; también

⁴⁵ Ibíd. página 65

⁴⁶ En su tenor literal prevé la norma:

“ARTÍCULO 131. MULTAS. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado”.

⁴⁷ Atrás transcrito.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

la de los artículos 67⁴⁸, artículo 60 parágrafo 2⁴⁹ y 131 C7⁵⁰, que le imponía anunciar su intención de incorporarse al carril a través de luces direccionales o, en su defecto, a través de señales manuales y efectuar la maniobra prudentemente sin exponer en peligro a los demás vehículos; asimismo, la del artículo 71⁵¹ que le obligaba a advertir en debida forma que estaba poniendo en movimiento su vehículo y tomar precauciones para evitar colisiones con los vehículos que se aproximen⁵².

Los medios de convicción demuestran que el señor Luis Carlos Muñoz, conductor del taxi, no tomó las precauciones suficientes para incorporarse a la vía y se interpuso como obstáculo de la motocicleta en la que se desplazaban los demandantes, sin percatarse de su aproximación o de otros vehículos que transitaran por el carril derecho, dejando el resultado dañino al azar, sin que se advierta la adopción de medidas o el anuncio el incorporación al carril para evitar el eventual daño que, a la postre se concretó. Lo anterior, conforme se colige de la determinación adoptada por la autoridad de tránsito en la resolución contravencional que se respalda en la versión rendida por el único testigo presencial del accidente, versión a la que se imprime alto grado de credibilidad por la observación directa del siniestro y que coincide con la declaración de los demandantes.

También se demostró la infracción del señor John Alexander Hernández Pizarro por la conducción de la motocicleta bajo la influencia del alcohol, según emerge del hallazgo del informe de alcoholemia que le fue practicado y que claramente transgrede un deber de conducta estatuido para la prevención de accidentes de tránsito terrestre.

⁴⁸ “ARTÍCULO 67. UTILIZACIÓN DE SEÑALES. Todo conductor está obligado a utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las siguientes señales manuales:

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente.

Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba.

Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia abajo.

PARÁGRAFO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.

PARÁGRAFO 2o. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con una señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando esté cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad”.

⁴⁹ Norma que indica: “(...) PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones”.

⁵⁰ Que establece como infracción a las normas de tránsito: “C. 7. Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril”.

⁵¹ “ARTÍCULO 71. INICIO DE MARCHA. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar choques con los vehículos que se aproximen”.

⁵² “ARTÍCULO 71. INICIO DE MARCHA. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar choques con los vehículos que se aproximen”.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

Tal deber de conducta, como se indicó, se transgredió por la simple conducción bajo los efectos del alcohol, no así por un estado de embriaguez como lo catalogó la parte demandada, puesto que, no se practicó prueba técnica que permitiera establecer de manera fiable y certera que el demandante se hallaba en un *“estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda (...)”*, conforme definición de embriaguez establecida en el artículo 2 del CNTT.

En esa línea, no milita prueba que permita determinar certeramente un estado de embriaguez en el demandante John Alexander, empero, del informe de resultados de análisis de alcoholemia que le fue practicado, sí se puede deducir con claridad que conducía bajo la influencia del alcohol y, por ende, le es atribuible una conducta jurídicamente reprochable.

5.1.3 Análisis de regularidad causal.

La doctrina probable en materia de responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, sostiene que para su estructuración no es necesario demostrar la culpa del demandado y que ella no sirve para su exoneración; en el mismo sentido, que el elemento subjetivo (imprudencia de la víctima) no basta si no tiene relevancia en la realización del daño.

En consecuencia, para el análisis de imputación objetiva, esto es, para establecer la causa adecuada del daño, se requiere un ejercicio de abstracción que permita identificar su origen en términos de probabilidad y previsibilidad, tarea para la cual resulta indispensable el análisis fáctico y jurídico que antecede, pues solamente mediante la identificación de las condiciones de hecho relevantes y de las normas jurídicas en que las que ellas se subsumen, se puede establecer el marco jurídico que, ajeno al elemento volitivo de los intervinientes, permita deducir cuál fue la razón que probable y previsiblemente ocasionó el menoscabo.

Se trata entonces de construir un modelo relacional de los comportamientos, eliminando todo juicio volitivo respecto de sus artífices, para construir un prototipo que indique la razón del daño en condiciones regulares y predecibles; se podría decir, el análisis de las conductas que interactúan en la ocurrencia de un determinado daño, bajo la lógica de las normas que las regulan, más no de la conciencia o conducta esperada de sus ejecutores.

En este caso, la depuración realizada a través del análisis material y jurídico, permite distinguir, a modo de arquetipo para definir la causa adecuada del daño bajo estudio, la confluencia de dos reglas de derecho:

- Aquella que consagra el deber de todo conductor de abstenerse de poner en riesgo a los demás, conocer y cumplir las normas de tránsito, así como anunciar su intención de incorporarse al carril a través de luces direccionales o señales manuales y efectuar las maniobras que no pongan en riesgo a los demás actores viales.

- Aquella que prohíbe *"conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas"*.

¿En abstracto, cuál de las dos conductas infractoras seleccionadas sería la causa adecuada del daño que las involucra, acaso lo serían las dos y en qué proporción?

Para definirlo, la jurisprudencia sugiere tener en cuenta las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable, las máximas de la experiencia y los juicios de probabilidad.

Tales reglas, criterios y máximas serán más consistentes en la medida en que no dependan de razonamientos subjetivos, sino que encuentren respaldo en soportes fundados que las blinden de objetividad y ofrezcan fuerza de convicción.

En esas condiciones, para resolver este caso, se considera que tales premisas emanan de la Constitución Política, de la regulación normativa de tránsito y sus reglamentos y de estudios de organismos especializados que permiten efectuar razonamientos de probabilidad, como se expone a continuación:

- a) El artículo 13 de la Carta consagra el derecho a la igualdad y el deber de proteger especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, imponiéndole al Estado el compromiso de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Esta garantía fundamental tiene relación con el régimen de tránsito terrestre automotor, pues el CNTT define su ámbito regulatorio precisamente a partir de un contexto en el que concurren multiplicidad de sujetos en diversidad de circunstancias: *"circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos"*; luego la interacción entre ellos puede dar lugar a situaciones que ameriten protección especial.

En concreto, el CNTT define en su artículo 2 la prelación, como la *"[p]rioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u otros vehículos"* y, en concordancia, el artículo 71⁵³, consagra la prelación de los vehículos en marcha, frente a los que se ponen en movimiento, exigiéndole al primero advertirlo y ser cauto, para prevenir colisiones con los segundos.

Se deduce entonces que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de situaciones de asimetría en el tránsito y por ello otorga beneficios a quienes por determinadas razones acuden a dicho contexto y se encuentran en situación menos ventajosa con respecto a los demás

⁵³ ARTÍCULO 71. INICIO DE MARCHA. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar choques con los vehículos que se aproximen.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

vehículos. En este caso, la ubicación de los vehículos que se van a poner en marcha frente a los que ya lo están, le otorga prelación a los segundos y obliga a los primeros a aguardar y ser cautos, de tal forma se confiere protección especial con base en la condición de circulación por las vías.

El sentido común indica que la mitigación de una colisión al momento de la incorporación de un vehículo a una vía por la que circulan otros, depende en mayor medida de quien se incorpora y en menor medida de quien ya se desplaza por ella. Al primero le basta abstenerse de ingresar a la vía para precaver un encuentro en su totalidad, mientras que al segundo solamente le queda procurar una reacción oportuna y hábil, como sería utilizar su dispositivo sonoro, maniobrar o frenar, sin que ello asegure en plenitud la mitigación de un choque.

b) No hay derechos absolutos, la misma Constitución establece en el artículo 95, el deber de toda persona de *“(r)espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”*, por ello el CNTT impone en su artículo 55 una regla general de prudencia y consideración con los demás actores en la vía.

Del CNTT emana un claro mensaje de sensatez para los conductores, ya que indica que no todas las personas están habilitadas para conducir vehículos en nuestro territorio, para ello se requiere idoneidad acreditada por una autoridad competente, previa verificación de la aprobación de exámenes teóricos y prácticos de conducción, certificado de aptitud para conducir y certificado de aptitud física, **mental** y de **coordinación motriz** para tales fines, todos expedidos por instituciones especializadas en la materia. De tal forma, el ordenamiento jurídico concede relevancia a las condiciones personales del conductor, exigiéndole, entre otras, especiales cualidades de coordinación y atención.

La conducción bajo el influjo del alcohol está relacionada con mayor riesgo en la accidentalidad vial. Así, la Ley 1696 de 2013 modificó el artículo 152 del CNTT, en el sentido de establecer medidas sancionatorias adicionales según el grado de alcoholemia y la reincidencia en la conducta. Consultados sus orígenes, el proyecto de ley lo explicó precisamente por el aumento de cifras en los accidentes viales y explicó que, *“los peatones y los motociclistas resultan los actores del tránsito más vulnerables”*⁵⁴.

En el mismo sentido, el *“Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015”*, realizado por la Organización Mundial de la Salud, vinculó la conducción bajo los efectos del alcohol como uno de los cinco factores más importantes que afectan la seguridad vial. Destacó el organismo: *“conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la*

⁵⁴ Proyecto de ley que se consulta en la página web: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2013/gaceta_963.pdf. Fecha de consulta: 30 de mayo de 2023

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

probabilidad de accidente y de que este termine en muerte o traumatismo grave”⁵⁵.

Asimismo, la Dirección de Tránsito y Transporte, Centro Observatorio del Delito de la Policía Nacional, mediante el estudio denominado *Caracterización de la Accidentalidad en Colombia: Análisis del Fenómeno desde el Estudio del Factor Humano* explica:

“Aun en pequeñas proporciones el consumo de alcohol es causante de errores de ejecución y tiene incidencia en aproximadamente la mitad de los accidentes cuyo resultado final es la muerte, a su vez constituye la tercera parte de los accidentes con lesionados ...

Se ha generalizado que los casos altos de embriaguez son los que afectan la seguridad vial, situación que no se asemeja con la realidad, porque varios estudios han afirmado que son más peligrosos los casos de semiembriaguez, es decir, índices de alcoholemia reducidos pero que sin duda alguna alteran las capacidades motrices y de percepción ante el peligro en el momento de la conducción”⁵⁶.

Estos estudios respaldan una máxima de la experiencia y un juicio de probabilidad positivizado: la conducción bajo los efectos del alcohol tiene relación directa con la seguridad vial porque aumenta la posibilidad de ocurrencia de un accidente de tránsito y la letalidad de sus consecuencias, al disminuir la percepción del entorno y reducir la capacidad de reacción del conductor.

En ese escenario, contrario al criterio del juzgador de primer grado, la conducción bajo la influencia del alcohol, aún en menores proporciones, está directamente relacionada con el riesgo en los accidentes de tránsito, por consiguiente, en este caso, la Sala considera que el hallazgo de etanol en sangre incidió causalmente en la producción del daño, no al punto de evitarlo, por cuanto confluyó con el actuar imprudente del conductor del taxi que resultó trascendental para la ocurrencia del siniestro, pero no puede desconocerse que constituyó un factor importante de riesgo en la accidentalidad vial.

Así las cosas, el examen del asunto en primera instancia adoptó como causa exclusiva la conducta desplegada por el conductor del taxi, sin atribución de responsabilidad a la conducción del motociclista bajo la ingesta de alcohol, es por ello que se modificará la decisión, pues en este caso no se demostró el hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad, pero si se halló contribución causal del conductor del taxi.

Pese a lo anterior, no puede considerarse igual conclusión frente a la demandante Johana Estrada que se vio involucrada en el accidente de tránsito, pues, aunque la parte demandada en la alzada le atribuyó

⁵⁵ Ver archivo “Informe Mundial Seguridad Vial” página 7

⁵⁶ Ver archivo “23CaracterizacionAccidentalidadColombia”

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

responsabilidad por decidir trasladarse como parrillera a sabiendas de la condición del conductor de la motocicleta, tal supuesto fáctico no fue acreditado, a saber, no se demostró su conocimiento frente al estado de alcoholemia de John Alexander.

Y aun cuando adujo que previo al accidente se encontraba con John Alexander en la casa su madre, tal circunstancia por sí sola no es suficiente para deducir el conocimiento de la conducción bajo los efectos del alcohol en que incurrió John Alexander, luego, por falta de prueba de dicho supuesto fáctico no es posible atribuirle incidencia causal en la generación del daño, por ende, la condena indemnizatoria en su favor no estará sometida a reducción alguna.

5.2 Conclusiones.

Colofón de lo expuesto, analizado el caso desde el modelo abstracto que permitieron construir las razones de hecho y de derecho relevantes, a la luz de los criterios de probabilidad y previsibilidad que emanan de nuestro propio ordenamiento jurídico y con apoyo en estudios que dan cuenta de la experiencia en la materia, se resuelven los problemas jurídicos planteados:

5.2.1 Incidencia causal.

La causa adecuada del daño que nos ocupa no se puede atribuir exclusivamente al conductor del taxi por no tomar las precauciones suficientes para retomar la vía principal y ponerse como obstáculo de la motocicleta, tampoco al conductor de la motocicleta que conducía bajo los efectos del alcohol. La conducta de ambos extremos incidió en la producción del daño.

Resulta predecible para el motociclista que conduce bajo la influencia del alcohol que se está incurriendo en una conducta contraria al ordenamiento, que expone la propia integridad e incluso la vida, por reducir sus capacidades para reaccionar frente a las incidencias en la vía; pero también previsible para el conductor de un automóvil que se pretende incorporar a una vía por la que están circulando otros vehículos que hacerlo sin cautela y sin anunciarlo es mayormente determinante de la probable ocurrencia de colisión. La desatención de los dos conductores, lógicamente contribuye a la ocurrencia del accidente y sus consecuencias.

5.2.2 Grado de incidencia.

La incidencia causal da lugar a estimar la excepción de reducción de la apreciación del daño por la exposición imprudente en que incurrió John Alexander Hernández, conforme al artículo 2357, fin para el cual se tienen en cuenta las siguientes razones para su dosificación:

- a) El potencial mitigatorio de una colisión radica principalmente en cabeza del conductor del vehículo que se incorpora en la vía, pues una abstención de su parte bastaba para impedir su ocurrencia, mientras

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

que la capacidad de reacción del motociclista, frente a la incorporación inadvertida y descuidada no necesariamente garantizaba evitar el choque, por lo que es mayor la incidencia causal del conductor del taxi.

- b) El ingreso improvisado a la vía y el consumo de alcohol mientras se conduce son conductas infractoras de la ley de tránsito, de tal forma que, en una colisión en la que ellas confluyen, sin incidencia de otro factor, resulta mayormente determinante el actuar del conductor que obstruye sin precaverlo que el de quien se desplaza en condiciones que ciertamente alteran su atención y capacidad de reacción porque, si bien los estudios indican que el consumo de alcohol limita las capacidades de reacción, en este caso no se probó embriaguez, sino el grado cero (o) de alcoholemia, de tal forma que, aunque ello incidió en la capacidad de reacción frente a la inadvertida barrera en la vía, lo cierto es que quien mayormente pudo mitigar el encuentro fue el taxista, al motociclista no le quedaba más que depender de sus limitadas capacidades de reacción.
- c) En ausencia de otro factor de incidencia, la comparación del potencial dañino entre la actividad de conducción de un automóvil y de una motocicleta revela que es considerablemente mayor la primera de ellas por la asimetría en volumen de los rodantes, de tal forma que, la mayor capacidad de lesionar por obstrucción implica mayor contrapartida de atención y cuidado por parte de quien se constituye en barrera.

El conductor del vehículo no solo debía conocer el riesgo de accidente al incorporarse al carril sin anuncio y medida de precaución, sino que pudo avizorar su realización respecto de cualquiera de los vehículos o motocicletas que transitaran la por la vía, pero prefirió obviar un resultado altamente previsible y que finalmente se materializó en las lesiones de los demandantes. El motociclista, claramente, cometió una imprudencia al conducir bajo la influencia del alcohol, dejando al azar el riesgo que ello implicaba.

Así las cosas, el riesgo o probabilidad de daño se incrementó significativamente cuando pese a que implicaba incorporarse a una vía, el conductor del taxi lo hizo desmesuradamente obstaculizando el paso de la moto conducida por el demandante, quien no minimizó el impacto con una reacción adecuada al no tener toda la capacidad de reacción a su disposición por la ingestión previa de alcohol.

En ese contexto, es claro que ambos conductores contribuyeron causal y adecuadamente a la ocurrencia del accidente, pero la incidencia no se puede distribuir por partes iguales, pues para la realización del daño resultaron determinantes la capacidad mitigatoria, el grado de alcoholemia y la potencialidad dañina, motivos por los cuales se concluye que para la apreciación del daño la atribución de responsabilidad debe recaer en mayor proporción sobre el conductor del taxi.

En suma, la confluencia de multiplicidad de razones que atribuyen incidencia causal adecuada principalmente al conductor del vehículo, conduce a la Sala a concluir que la participación de las conductas en la realización del daño analizado se debe atribuir en un ochenta por ciento (80%) al conductor del taxi y en un veinte por ciento (20%) al motociclista. Sin lugar a atribuir incidencia causal alguna a Johana Estrada como parrillera de la motocicleta, pues, como se anotó, no se probó su conocimiento sobre el estado de alcoholemia de John Alexander Hernández u otra conducta que permita atribuir concurrencia causal en la producción del daño.

5.3 Reconocimiento del lucro cesante futuro.

Reprocharon los demandantes la negación del lucro cesante futuro, pese a acreditar la pérdida de capacidad laboral y los ingresos que percibían al momento del accidente.

De manera preliminar, advierte la Sala que, una vez emitida la sentencia, el apoderado de la aseguradora solicitó adición de la providencia con relación al lucro cesante futuro. Solicitud que fue negada por el juez tras señalar que la pretensión fue desestimada, conforme se indicó en el numeral 5° de la resolutive que negó las pretensiones restantes no concedidas.

Empero, se extraña motivación que soporte la negativa de la pretensión, por tanto, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 287⁵⁷ en armonía con el 328 del CGP, se procederá a analizar la procedencia del reconocimiento de lucro cesante futuro suplicado en la demanda.

El lucro cesante lo define el artículo 1614 como la *“ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”*. En concreto, en la modalidad de futuro corresponde a la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho dañoso, que se aspera recibir con posterioridad a la demanda. En palabras de la Corte: *“está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o **que se recibirán luego**, con el mismo fundamento de hecho”* (Negrilla fuera del texto)⁵⁸.

⁵⁷ Norma que dispone: *“El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria”*.

⁵⁸ Corte Suprema de Justicia, CSJ, SC de 7 de mayo de 1968 citada en la Sentencia SC11575 de 2015.

Asimismo, de antaño ha sostenido: *En tratándose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se reportó en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habría de producir, pero que, como consecuencia del hecho dañoso, ya no se presentará”* CSJ SC de 28 de agosto de 2013, Rad. 1994-26630-01 (Subrayado fuera del texto).

Aunado a ello, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998⁵⁹ prevé la regla según la cual, la reparación de los daños causados a una persona debe atender al criterio de resarcimiento integral.

De acuerdo con los presupuestos jurídicos en comento, no encuentra la Sala razón lógica para la desestimación del lucro cesante futuro, por cuanto, la historia clínica, las certificaciones laborales y el dictamen de pérdida de capacidad laboral que reposan en el expediente, brindan conocimiento acerca de la alteración que en el tiempo supone para los afectados la merma en la aptitud laboral y dan cuenta de la existencia de un daño cierto edificado en la pérdida de capacidad productiva que afecta a los demandantes, correspondiendo su reconocimiento en aplicación del principio de reparación integral.

Contrario al criterio sostenido por el extremo pasivo, si existe prueba útil, contundente y pertinente para la cuantificación del daño, pues se encuentra acreditado que John Alexander y Johana, como consecuencia del accidente, perdieron capacidad laboral de manera permanente parcial y que para el momento del accidente percibían ingresos en una cuantía determinada.

En el expediente obra dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que fijó a John Alexander y a Johana una pérdida de capacidad laboral del 10.54% y 20.13%⁶⁰, por las patologías, para el uno de *"fractura de otro dedo de la mano y deficiencia por alteración de miembro superior derecho + dominancia"* y, para la otra, *"fractura de la diáfisis del fémur, dolor y disminución de fuerza D MID y deficiencia por alteración de miembros inferiores"*. Pérdida de aptitud laboral que se concluyó a partir del examen del registro clínico, de las deficiencias, discapacidades y minusvalías halladas.

Aunado a ello, las víctimas demostraron los ingresos que percibían para la fecha del siniestro, conforme las certificaciones aportadas que fueron inclusive ratificadas por quienes las suscriben y no fueron desvirtuadas por la pasiva.

El documento suscrito por Patricia Helena Hernández Ruiz certifica que, John Alexander labora al servicio de Mario de Jesús Tobón Tobón desde el 23 de septiembre de 2013 en tareas de adiestramiento y monta de caballos en la Finca *"Tierra Fuego"* con un salario de \$1'247.000⁶¹. Asimismo, la certificación expedida por Dropopular S.A., hace constar que Johana Estrada laboró en dicha compañía hasta el 6 de octubre de 2018 como auxiliar de bodega y devengaba un salario de \$781.300⁶².

⁵⁹ Prevé la norma: *"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales"*.

⁶⁰ Ibid. páginas 79-87 y 265-269

⁶¹ Ibid. página 251

⁶² Ibid. página 411

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

En ese escenario, se concluye la existencia de un daño cierto, cuantificado y probado, por ende, se modificará la decisión de primer grado con relación a la negativa del lucro cesante futuro, de esa manera, al estimar procedente su reconocimiento se procederá con la correspondiente liquidación a la fecha de la presente decisión⁶³:

Lucro cesante futuro

En la demanda se solicitó lucro cesante futuro por las sumas de \$25’443.305 para John Alexander y \$32.232.633 para Johana.

Para efectuar el cálculo, se consideró la edad de los demandantes John Alexander y Johana para el momento del accidente (36 y 25 años), así como su expectativa de vida (511,2 y 704,4 meses) y se descontaron los meses calculados para el LCC (21 y 15 meses), resultando 490,2 y 689,4 meses.

Para determinar la base, se estableció el porcentaje de PCL de los demandantes (10.54% y 20,13%) sobre los ingresos devengados al momento del accidente, actualizados a la fecha de la liquidación (\$1.294.714 y \$807.738), resultando las sumas de \$136.462 y \$162.597 como base de la operación.

La liquidación se efectuó bajo la fórmula jurisprudencialmente establecida y no fue objetada por el extremo pasivo con las cargas argumentativas que ordena el artículo 206 del CGP, en consecuencia, la estimación en la demanda es prueba del monto, según la disposición aludida.

Las liquidaciones se efectuaron de la siguiente manera:

<u>John Alexander:</u>	<u>Johana Estrada</u>
$LCf = R.A. \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	$LCf = R.A. \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$
$LCf = \$136.462 \times \frac{(1+0,004867)^{490,2} - 1}{0,004867(1+0,004867)^{490,2}}$	$LCf = \$162.597 \times \frac{(1+0,004867)^{689,4} - 1}{0,004867(1+0,004867)^{689,4}}$
$LCf = \$136.462 \times \frac{9,805079168812}{0,052588320314}$	$LCf = \$162.597 \times \frac{27,422214793785}{0,138330919401}$
$LCf = \$136.462 \times 186,449749873484$	$LCf = \$162.597 \times 198,236337273897$
<u>$LCf = \\$25.443.305$</u>	<u>$LCf = \\$32.232.633$</u>

Los demandados Luis Carlos Muñoz Molina, Tax Coopebello y Gladis Hurtado García se opusieron al reconocimiento del perjuicio, porque carecía de prueba de los ingresos reales de los demandantes. A su turno, la aseguradora demandada se opuso porque la certificación laboral de John Alexander no contaba con soporte de la veracidad de la misma. Argumentos que no son de recibo pues, como se anotó, los documentos son idóneos y prestan suficiente mérito demostrativo acerca de los

⁶³ Conforme el inciso segundo del artículo 283 del CGP que reza: “El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado”.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

ingresos de los afectados, siendo además ratificados en audiencia, además que en contra de su contenido no se adujo prueba alguna que los refutara.

Con relación al argumento esbozado por la aseguradora consistente en que frente a John Alexander demostró un contrato de prestación de servicios y no un vínculo laboral y, por tanto, la base del cálculo sería sobre el 40% de los ingresos, tampoco es de recibo, puesto que la lectura del certificado no muestra una relación diferente de un nexo laboral y, en todo caso, para los efectos de la indemnización lo trascendental es la pérdida de la capacidad productiva del afectado, situación que fue demostrada.

En ese estado de cosas, no se acogen los argumentos de los demandados en la objeción al juramento estimatorio, pues no se argumentó ni demostró una inexactitud en el cálculo y este coincide con las fórmulas y reglas establecidas jurisprudencialmente, por lo que la estimación hace prueba de la cuantía del perjuicio y, simplemente, por disposición del artículo 283 del CGP, corresponde actualizar al *ad quem*:

VH: \$25'443.305 y \$32'232.633

Índice inicial: 102,44 (mayo 2019 – fecha presentación demanda⁶⁴)

Índice final: 131,77 (marzo 2023⁶⁵)

En definitiva, se establece:

$VA = \$25'443.305 \times 131,77 / 102,44 = \$32'728.077,89$

Reducción 20% John Alexander: \$26'182.462,39

$VA = \$32'232.633 \times 131,77 / 102,44 = \$41'461.285,14$

Sin reducción Johana Estrada: \$41'461.285,14

Así entonces, la liquidación del lucro cesante futuro es como se detalla a continuación, a favor del demandante John Alexander la suma de **\$26'182.462,39** y a favor de Johana Estrada **\$41'461.285,14**.

5.4 Tasación de perjuicios extrapatrimoniales.

Discreparon los demandados de la cuantificación de los perjuicios morales y daño a la vida de relación, por cuanto la condena no guarda proporción con la entidad de los padecimientos sufridos por los demandantes, las secuelas de carácter permanente, la pérdida de capacidad laboral demostrada en el proceso y la variación que supuso en las condiciones de vida, así como el hecho de que los demandantes al momento del siniestro eran pareja generando padecimiento por el sufrimiento del otro.

Reprochó además que el juez de primera instancia en la parte motiva enunciara sumas diferentes a las contenidas en la parte resolutive y que

⁶⁴ Estos índices pueden consultarse en el link <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc>.

⁶⁵ más reciente certificado por el DANE

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

cuantificara el daño a la vida de relación en una suma dineraria cuando debió tasarse en salarios mínimos.

5.4.1 Cuantificación del daño moral.

Con relación a los perjuicios morales, se destacan algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia en la materia, a fin de establecer si, en efecto la cuantificación efectuada por el *a quo* resultó insuficiente o, por el contrario, atendió los lineamientos jurisprudenciales y las particularidades del caso.

En materia de lesiones personales, la Sentencia SC12994/2016 tasó el daño moral en \$56'670.000 para una víctima directa de lesiones, secuelas corporales y en el rostro de carácter permanente, a causa de accidente de tránsito, suma que para la época se traducía en 82 SMLMV; la Sentencia SC562-2020, reconoció una suma de \$60'000.000 (aprox. 68 SMLMV) y \$30'000.000 para la víctima directa y para los padres de una persona que sufrió ceguera total en ambos ojos por extirpación de sus globos oculares, parálisis parcial del cuero, trastorno mixto del desarrollo con síntomas autistas, entre otras afectaciones en el nacimiento; la Sentencia SC3943/2020 reconoció \$40'000.000 (45 SMML para la época), para víctima directa y cada uno de sus padres como consecuencia del daño psicomotor permanente por parálisis cerebral; la Sentencia SC780/2020 reconoció \$30'000.000 (34 SMLMV aprox.) para víctima directa por lesiones de mediana gravedad padecidas por trauma craneano y fractura frontal y; la Sentencia SC 5885/2016 condenó a 15'000.000 (21 SMLMV aprox.) por perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de capacidad laboral en un 20.65%.

En este asunto, el fallador condenó a los demandados al pago de 10 y 25 SMLMV en favor de John Alexander y Johana, respectivamente. Cuantificación que, según los precedentes en comento y las condiciones particulares de afectación, se estiman insuficientes frente a John Alexander dados los padecimientos físicos, funcionales e inclusive estéticos que repercutieron necesariamente en el estado anímico de la víctima.

John Alexander presentó una incapacidad médico legal definitiva de 60 días y secuelas de *“deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente: lesiones cicatriciales retractiles en 4 y 5 dedo mano derecha; Perturbación funcional de miembro: Limitación en un 50% a la flexión total de 4 y 5 dedo de la mano derecha de carácter permanente; Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente: cicatriz de 10 cms. en zona de muñeca derecha (por el injerto realizado)”*⁶⁶, según se desprende del informe del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la E.S.E Hospital Santa Margarita. Además, sufrió una pérdida de capacidad laboral del 10.54% por *“fractura de otro dedo de la mano”* presentando *“deficiencia por alteración de miembro superior derecho + dominancia”*⁶⁷

⁶⁶ Ibid. página 90

⁶⁷ Ibid. páginas 79-87

Tales padecimientos impactaron considerablemente la esfera emocional del demandante pues, según el testigo Jairo de Jesús Hernández Ruiz, la pérdida de la falange fue significativa con relación al cabal desempeño de la actividad productiva que desempeñaba en labores de adiestramiento y monta caballos, toda vez que afectaba el agarre de las riendas de los animales, asunto que impactó el plano psicológico de John Alexander al sentir temor de perder su empleo.

Asimismo, lo indicó la testigo Yolanda Pizarra, quien manifestó: *"le afectó la falange de sus dedos y el como oficio de montador tiene que llevar las riendas para manejar el animal, salvaje totalmente, tiene que tener disciplina todos los días y quedó totalmente afectado y quedó con problemas en la rodilla no se atrevió a decir por temor que lo fueran a echar"*.

En ese escenario, resulta lógico colegir que la limitación funcional, sumado a la deformidad física por cicatrices de tamaño considerable en lugares visibles como la mano y muñeca derecha realmente impactaron la esfera interna y afectiva del demandante con sentimientos de miedo, angustia, sufrimiento e incluso la reputación en la labor productiva que desplegaba y, en consecuencia, amerita una reparación superior.

Es que la estimación del *a quo* se fijó en una suma muy inferior a los precedentes referidos y, aun cuando no alcanza la misma intensidad y gravedad en las lesiones y secuelas, tampoco es dable subvalorar la afectación, puesto que la limitación y deformidad en el cuerpo provocan no solo dolor físico, sino también el sometimiento a procedimientos médicos y terapias que causan dolor, angustia e irritabilidad; las disfuncionalidades permanentes variaron drásticamente las condiciones laborales del demandante al punto de sentir temor a ser despedido, situaciones que necesariamente perturban emocionalmente. Deriva de tales circunstancias que la tasación debe ser superior, en consecuencia, se accederá al reproche del actor y se modificará la condena para fijarla en 15 SMLMV.

Con relación a Johana Estrada, se considera adecuadamente cuantificado el perjuicio moral, dado que, se fijó en 25 SMLMV, suma superior a la determinada por el *a quo* frente a John Alexander, pero que se justifica en la mayor gravedad de las lesiones sufridas y la pérdida de la capacidad laboral.

Sumado a ello, la tasación es similar a la establecida la Sentencia SC 5885/2016 que condenó a 15'000.000 (21 SMLMV aprox.) por perturbación psíquica, deformidad física permanente y pérdida de su capacidad laboral en un 20.65%, porcentaje similar al determinado para la afectada y, por tanto, sirve de parámetro para la cuantificación, por consiguiente, la Sala mantiene la tasación efectuada.

En esa línea, el monto con la reducción del 20% del monto indemnizatorio respecto de frente a John Alexander corresponde a 12 SMLMV.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

Conforme lo anterior, se condenará a los demandados al pago de las sumas equivalentes a 12 SMLMV y 25 SMLMV en favor de los demandantes John Alexander Hernández Pizarro y Johana Estrada Jaramillo, respectivamente, por concepto de daño moral.

5.4.2 Cuantificación del daño a la vida de relación.

La parte actora consideró insuficiente la tasación del daño a la vida de relación y recriminó que la tasación no se definiera en salarios mínimos.

En este aspecto, la condena se concretó en las sumas de \$5'000.000 y \$15'000.000 (5.5 y 16.5 SMLMV para el momento del fallo) en favor de John Alexander y Johana, respectivamente.

En cuanto a la expresión monetaria del daño a la vida de relación se aprecia que la Sala de Casación Civil ha establecido condenas expresadas en salarios mínimos (sentencia SC 4803-2019) y también en moneda legal (sentencia SC 3728-2021), de tal forma que no se advierte al respecto una clara doctrina. Sin embargo, se aprecia que en la sentencia SC4703-2021 casó parcialmente, únicamente con el propósito de indexar la condena por el daño moral que el tribunal tasó en pesos, reconociendo la conveniencia de utilizar índices o unidades que permitan actualizar dicha condena en aplicación del principio de reparación integral y afirmando que la condena nominal es contraria a la equidad, así lo argumentó:

“13.6. Limitar el pago de lo señalado por concepto de perjuicios inmateriales a una suma nominal no responde al principio de reparación integral y en equidad ni a la mitigación del dolor. Si bien carecen de la característica de resarcitorios, la actualización no los convierte en tales. Se pretende que, sin dejar de ser paliativos, se satisfagan a valor presente. El pago en valor histórico, en lugar de atenuar el sufrimiento padecido, lo incrementa y pone en desventaja a las víctimas.

El agregado de la actualización, por supuesto, no tiene la condición de perjuicio. Se trata de la misma suma, en su valor real. Por esto, en esta ocasión se reitera la posibilidad de pagar los perjuicios morales con sumas actualizadas. Al fin de cuentas, una suma nominal, pagada a valor presente, es la misma cantidad, solo que actualizada.

Se debe dejar, sí, claro, la indexación únicamente procede respecto de las cantidades señaladas en los casos concretos...”⁶⁸

La Sala acoge tal razonamiento y por tanto estima el reparo de la actora, pues el reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo va en línea con el principio de reparación integral y desconocerlo en contra de los propósitos que lo sustentan, motivo por el cual la decisión que se adopta

⁶⁸ Sentencia SC4703-2021 del 22 de octubre de 2021, Rad: 11001-31-03-037-2001-01048-01, MP Luis Armando Tolosa Villabona.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

expresa la condena de los daños extrapatrimoniales en SMLMV, como uno de aquellos índices en los que se han apoyado la jurisprudencia con tal propósito.

En cuanto a la cuantificación, en materia de lesiones personales la Corte fijó en la Sentencia SC 09/12/2013 rad. 88001310300120020009901, la suma de \$140'000.000 por daño a la vida relación con reducción del 50%, por las lesiones y diagnósticos adicionales como ceguera, hidrocefalia, impedimento para ponerse de pie, para tener relaciones sexuales, entre otros; en Sentencia SC21828/2017 la tasó en \$30'000.000 (40 SMLMV) por pérdida del ojo izquierdo en caso de responsabilidad médica y; en la Sentencia SC4803/2019 condenó a 50 SMLMV por pérdida de la capacidad de la locomoción permanente.

De conformidad con los máximos que en materia de daño a la vida de relación ha cuantificado la jurisprudencia, considera la Sala que, aun cuando los padecimientos sufridos por los demandantes no revisten igual intensidad y gravedad a los referidos casos examinados por la Corte y no procede equiparar las condenas, sí resulta razonable aumentar la cuantificación, de cara a las particulares afectaciones sufridas.

La Sala puede inferir que el daño a la vida de relación se aprecia realmente presente para los demandantes John Alexander y Johana, en consideración al término de incapacidad médica (60 y 180 días respectivamente), las secuelas por limitaciones funcionales, los tratamientos médicos a los que vieron avocados y las deformidades físicas por las cicatrices de carácter permanente y ostensible en sus extremidades y en su piel, circunstancias que necesariamente redundan en las condiciones de vida, el entorno social y familiar.

Con relación a John Alexander, como se expuso precedentemente, presentó secuelas de deformidad física que afectaron su cuerpo en forma permanente, cicatrices y perturbación funcional en un 50% de la flexión total en los dedos de la mano derecha y cicatriz de 10 cm en la muñeca derecha y una deficiencia que afectó significativamente la función de dominancia. Tales circunstancias además de representar una importante afectación en las relaciones intersubjetivas y su entorno social – afectivo derivadas de la esfera estética, redundan en la actividad de montador de caballos, pues no podrá desarrollarla con el mismo dominio y facilidad.

Importante resaltar que las afectaciones de Johana fueron más significativas no sólo en cuanto al tiempo de incapacidad y merma de la aptitud laboral, sino en lo concerniente a la deformidad anatómica que afectó su cuerpo *“secundario a cicatrices, hundimiento anatómico”*, gravedad que incrementó al ser sometida al *“acortamiento de miembro, que obliga a cojear”*, pues la sumió en depresión *“por ver su cuerpo con cambios”*, conforme se desprende de la lectura del informe del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ESE Hospital Santa Margarita⁶⁹.

⁶⁹ Ibíd. páginas 271 - 273

Sobre el particular, Johana en interrogatorio de parte calificó su afectación como una *"limitación moral como mujer"*, viendo alterada su *"integridad"* y enfatizó que *"los huecos en las piernas son irremediables"*.

Las deformaciones físicas permanentes en la piel como cicatrices varían la autopercepción de las personas y repercute en el ámbito social o de pareja, más aún si se suman otras circunstancias como cojera y hundimientos anatómicos, la primera desentraña una alteración en actividades cotidianas y, en su conjunto, impactan negativamente la autoestima de una persona y trasciende al plano de las relaciones interpersonales.

Al respecto, la testigo Olga Margarita Jaramillo depuso sobre la alteración en las condiciones de existencia de Johana, señaló que ha presentado:

"mucha dificultad para caminar, trotar, alzar el pie, no puede estar mucho tiempo parada, dificultad para el empleo. Antes era muy trabajadora, muy activa en su deporte, en el caminar se defendía fácilmente, se subía al bus, no había inconveniente para ella, ahora hay mucho inconveniente en el pie, la incomodidad para caminar para sentarse, siempre le da dificultad subirse a un bus, no puede trotar, hacer ningún ejercicio por la dificultad en su pie, dolor, hinchazón".

Emerge entonces que existe prueba de las deficiencias, discapacidades, minusvalías y deformidades que sufrieron los demandantes, las cuales alteraron su estado anímico y por consecuencia las condiciones de existencia y las relaciones familiares y sociales, siendo más gravosa la situación de Johana, dada la deformidad anatómica a consecuencia del accidente y la imposibilidad o dificultad de efectuar actividades cotidianas y otras que le resultaban placenteras por la secuela de cojera, situaciones que implican un aumento en la cuantificación del daño a la vida en relación.

Y es que el *a quo* tasó el perjuicio en el equivalente a 5.5 y 16.5 SMLMV para el momento del fallo, sin embargo, los precedentes muestran sumas muy superiores a las impuestas por el juez de primera instancia y aunque, como se indicó, no suponen igual intensidad y gravedad, a juicio de la Sala tales condenas si resultan desproporcionadas de cara a los máximos establecidos y no resultan razonables conforme a la afectación de las lesiones corporales y su repercusión en el ámbito intersubjetivo, es decir, en su relación con el entorno de pareja, familiar, laboral y social, conforme las apreciaciones antecedentes que ameritan el merecimiento de una cuantificación superior.

En consecuencia, en ejercicio del arbitrio judicial que rige en la materia, el tribunal estima razonable modificar la decisión en el sentido de incrementar la condena a 10 y 20 SMLMV en favor de John Alexander y Johana respectivamente.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

En esa línea, se fijar el monto del daño a la vida de relación con la reducción del 20% respecto de John Alexander Hernández en 8 SMLMV.

Conforme lo anterior, se condenará a los demandados al pago de las sumas equivalentes a 8 SMLMV y 20 SMLMV, en favor de los demandantes John Alexander Hernández Pizarro y Johana Estrada Jaramillo, respectivamente, por concepto de daño a la vida de relación.

5.5 Reconocimiento de intereses moratorios.

La parte actora recriminó la desestimación de los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, a su juicio, había lugar a su estimatoria dado que se acreditó la responsabilidad del asegurado desde el mes siguiente a la presentación de la reclamación extrajudicial a la aseguradora, pues no cumplió la obligación a su cargo.

Sobre el particular, encuentra la Sala que, en efecto, el *a quo* no motivó la desestimación de la súplica de intereses moratorios, por tanto, se procederá a definir la viabilidad de su reconocimiento.

En lo pertinente, el artículo 1080 del Estatuto Comercial prevé la obligación del asegurador del pago de intereses de mora, una vez cumplido el plazo para el pago del siniestro dentro del mes siguientes a la fecha de acreditación de los presupuestos del artículo 1077 ibidem, esto es, la demostración de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida⁷⁰.

En tratándose de seguros de responsabilidad civil la jurisprudencia ha sostenido que, de acuerdo a los preceptos normativos en mención, corresponde al juzgador establecer el momento a partir del cual el reclamante, sea que lo haga judicial o extrajudicialmente, acreditó la ocurrencia del siniestro y la cuantía como condicionantes de la norma para habilitar el reconocimiento de los réditos a cargo del asegurador. Ha indicado de la Corte:

“(…) La segunda hipótesis se da cuando la víctima recurre o tiene que recurrir al órgano jurisdiccional, mediante la formulación de una demanda, en la que pretende que se imponga a la aseguradora la obligación de resarcirle los perjuicios que sufrió como consecuencia del daño que le infirió el asegurado, caso en

⁷⁰ En su tenor literal prevén las disposiciones jurídicas en comento:

“ARTÍCULO 1080. <PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES MORATORIOS>. <Inciso modificado por el parágrafo del Artículo 111 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”.

“ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

el cual le corresponderá al juez que conozca del proceso, determinar, según las circunstancias, el momento en el que quedaron cabalmente satisfechas las exigencias del preinvocado artículo 1077.

“En casos como el de sub lite, la acreditación de la existencia del siniestro y la cuantía de la pérdida que exige el artículo 1080 del Código de Comercio como detonante de la mora del asegurador, solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoración de la prueba, no antes, pues solo en desarrollo de esa labor de juzgamiento resulta posible determinar, de manera objetiva, lo que se tuvo por probado en el proceso.

Es que antes, ello es imposible, sobre todo si dicho demandado, la aseguradora llamada en garantía, o los dos, discuten la responsabilidad endilgada a aquél y/o el monto de los perjuicios solicitados, pues, se itera, únicamente hasta cuando el debate judicial quede zanjado por sentencia que lo defina en favor de la parte actora y en contra del accionado, es factible aseverar que el patrimonio del último está efectivamente expuesto a reducirse (siniestro) en un monto específico (cuantía de la pérdida).

Y, siendo ello así, y dado que, -como viene de verse- en contextos como el descrito la demostración de las variables del canon 1077 del estatuto mercantil se diferirá a la etapa de la sentencia, su ejecutoria bastará para hacer exigible el pago de la condena impuesta por la jurisdicción (...)⁷¹ (Subrayado fuera del texto).

Se concluye así que, como la ocurrencia del siniestro y la cuantía se encuentran plenamente determinadas con la intervención jurisdiccional, en particular, la ejecutoria de esta decisión que definió la responsabilidad civil del asegurado, se revocará la decisión de primer grado en cuanto a acceder al pago de los intereses de que trata el artículo 1080 del C. de Comercio como lo reclama el apelante, pero, sus efectos procederán una vez alcance firmeza la presente decisión.

5.6 Excepciones.

El Tribunal encuentra asimismo desacierto en la sentencia de primera instancia, puesto que, además de carecer motivación con relación a la desestimación del lucro cesante futuro y de los intereses de mora en contra de la aseguradora, tampoco se pronunció frente a las excepciones de mérito formuladas.

Con relación a las excepciones de mérito denominadas “culpa exclusiva de la víctima”, e “inexistencia de la obligación” están llamadas al fracaso, toda vez que, no se acreditó conducta del demandante incidiera como causa exclusiva en la producción del daño, por las razones expuestas. Igual

⁷¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC 1947 de 2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

suerte corren los medios exceptivos denominados *“falta prueba del daño”* y *“exageradas e infundadas pretensiones”*, pues, como se indicó, se demostró la existencia de daños ciertos y cuantificables.

Cabe resaltar que, la excepción de prescripción propuesta por la aseguradora no se fundamentó fácticamente, pese a ello, tampoco se advierte que la ocurrencia del fenómeno extintivo, como quiera que, el siniestro acaeció el 26 de agosto de 2017 y la demanda se presentó el 29 de mayo de 2019, siendo notificados los demandados en el término que prevé el artículo 94 del CGP, luego, la demanda interrumpió la prescripción y para dicho momento no habían transcurrido los términos de que trata el artículo 1081 del Estatuto Mercantil⁷².

No corre igual suerte la excepción de *“reducción del monto indemnizatorio”*, la cual conforme lo expuesto, prospera, pero solamente con relación al demandante John Alexander Hernández, dada la incidencia causal que aportó en la producción del daño.

Finalmente, en lo concerniente al medio exceptivo llamado *“límite asegurado”*, se advierte que la póliza 202735 ampara los riesgos de *“daños a bienes de terceros”* por 60 SMLMV, así como *“muerte o lesiones a dos o más personas”* en 120 SMLMV⁷³, por tanto, le corresponderá a la aseguradora asumir las condenas impuestas hasta el valor asegurado, como lo concluyó el *a quo*, el restante corresponderá en forma solidaria a los demandados.

5.7 Actualización condenas lucro cesante consolidado y daño emergente.

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 283 del CGP, se procede a actualizar la condena por daño emergente y lucro cesante consolidado establecido en la primera instancia, condenas que no merecieron reparo.

Actualización daño emergente

Daño emergente reconocido a John Alexander: \$1'113.150

VH: \$1'113.150

Índice inicial: 106,58 (febrero 2021⁷⁴)

⁷² Dispone el precepto normativo:

“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

⁷³ Ver ruta 07. EXPEDIENTE REMITIDO NUEVAMENTE POR EL JUZGADO / 03CuadernoLlamamiento / a.1.0 050883103001 2019-00223-00 LLAMAMIENTO EN GARANTIA página 71.

⁷⁴ Estos índices pueden consultarse en el link <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc>.

Índice final: 131,77 (marzo 2023⁷⁵)

En definitiva, se establece:

$$VA = \$1'113.150 \times 131,77 / 106,58 = \$1'376.241.$$

Reducción del 20%= \$1'100.992,8

Así entonces, la liquidación por daño emergente a favor del demandante John Alexander corresponde a la suma de **\$1'100.992,8**.

Actualización lucro cesante consolidado

Lucro cesante reconocido a John Alexander: \$5'303.270.

Lucro cesante reconocido a Johana: \$6'397.967.

VH: \$5'303.270 - 6'397.967

Índice inicial: 106,58 (febrero 2021⁷⁶)

Índice final: 131,77 (marzo 2023⁷⁷)

En definitiva, se establece:

$$VA = \$5'303.270 \times 131,77 / 106,58 = \$6'556.688,76$$

Reducción del 20%: \$5'245.351

$$VA = \$6'397.967 \times 131,77 / 106,58 = \$7'910.115,52$$

Sin reducción

Así entonces, la liquidación del lucro cesante consolidado para el término indicado y con la fórmula aplicada por la Corte Suprema de Justicia⁷⁸, es como se detalla a continuación, a favor del demandante John Alexander la suma de **\$5'245.351,01** y a favor de Johana Estrada **\$7'910.115,52**.

6. SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN.

La causa adecuada del daño la produjeron el demandado Luis Carlos Muñoz, conductor del taxi, al omitir anunciar su intención y tomar las precauciones suficientes para incorporarse a la vía e interponerse como obstáculo de la motocicleta, infringiendo el artículo 55 del CNNT y; el demandante John Alexander conductor de la motocicleta, por maniobrarla bajo la influencia del alcohol, transgrediendo prohibición del artículo 131 F del CNNT. Tal situación impone la prosperidad de la excepción denominada “*reducción del monto indemnizatorio*” en una proporción del 20% por participación en la realización del daño respecto de John

⁷⁵ más reciente certificado por el DANE

⁷⁶ Estos índices pueden consultarse en el link <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc>.

⁷⁷ más reciente certificado por el DANE

⁷⁸ Frente a la fórmula de indexación y liquidación del lucro cesante véase las sentencias CSJ SC4322 del 17 de noviembre de 2020, rad. 2006-00514-01; SC512 del 5 de marzo de 2018, rad. 2005-00156-01; SC15996 del 29 de noviembre de 2016, rad. 2005-00488-01; SC5885 del 6 de marzo de 2016, rad. 2004-00032-01.

Alexander, pues no se demostró comportamiento proveniente de Johana Estrada que permita atribuírselo.

Los perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante futuro se encuentran acreditados en atención a la frustración de las ventajas económicas esperadas por los demandantes, en virtud de la pérdida de capacidad laboral dictaminada y los ingresos que percibían los afectados, siendo un daño probado y cuantificable. Además, la tasación de daños extrapatrimoniales debe incrementarse de cara a las particulares afectaciones sufridas por los demandantes que impactaron su esfera emocional y anímica, así como sus condiciones de existencia.

Los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del C. de Comercio se reconocerán de cara a la determinación de responsabilidad de los demandados, en cuyo examen se probó la ocurrencia del siniestro y la cuantía, presupuestos que establece el del artículo 1077 ibidem para su concesión. Reconocimiento que se hace efectivo a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

La prosperidad del medio exceptivo que da lugar a la reducción del monto indemnizatorio, el reconocimiento del lucro cesante futuro, intereses de mora y el incremento de la condena en perjuicios extrapatrimoniales conducen a la modificación de la decisión de primera instancia. Sin condena en costas con ocasión a la prosperidad parcial de la alzada de ambos recurrentes.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

7. RESUELVE.

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente los ordinales primero y tercero de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello en el asunto de la referencia, el cual queda de la siguiente manera:

"1. DECLARAR IMPRÓSPERAS las excepciones de mérito opuesta por la demandada Cooperativa de Transportadores de Bello "TAX COOPEBELLO; y por la compañía Mundial de seguros S.A. A excepción del medio defensivo denominado "reducción del monto indemnizatorio" que se DECLARA PROBADO, por lo expuesto.

3. Condenar a la Cooperativa de Transportadores de Bello "TAX COOPEBELLO", Gladis Hurtado García y Luis Carlos Muñoz Molina Civil, la obligación de pagar indemnización de perjuicios a favor de los señores John Alexander Hernández Pizarro y Johana Estrada Jaramillo, conforme las siguientes sumas de dinero:

a) Para John Alexander Hernández Pizarro.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

- **Daño emergente: \$1.100.992,8.**
- **Lucro Cesante Consolidado: \$5.245.351,01**
- **Lucro Cesante Futuro: \$26.182.462,39**
- **Daño moral: 12 SMLMV**
- **Daño a la vida de relación: 8 SMLMV**

b) Para Johana Estrada Jaramillo:

- **Lucro Cesante Consolidado: \$7'910.115,52**
- **Lucro Cesante Futuro: \$41'461.285,14**
- **Daño moral: 25 SMLMV**
- **Daño a la vida de relación: 20 SMLMV**

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello en el asunto de la referencia. En consecuencia, ORDENAR a la aseguradora el pago de los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

TERCERO: En lo demás permanece incólume la sentencia de primera instancia.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
Magistrado

(En ausencia justificada)
JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado